BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES

Núm. 61

Día 16 de febrero de 1978

INDICE

	<u>Páginas</u>	<u>Páginas</u>	
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS			
Solicitud de interpelación presentada por don Angel Perera Calle, del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana	1064	món Tamames Gómez sobre política energética	1069
Solicitud de interpelación presentada por don Ciriaco de Vicente Martín, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso	1065	Pregunta formulada por don Enrique Sapena Granel sobre aplicación del decreto 840/76	1070
Solicitud de interpelación presentada por don Manuel Chaves González, don Ramón Vargas Machuca, don Jerónimo Sánchez Blanco y don Pedro Jiménez Galán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso	1066	Pregunta formulada por don Virgilio Zapatero Gómez sobre la política del Ministerio de Agricultura en el tema de la producción de semilla de girasol en la provincia de Cuenca y sobre la construcción de una Planta Extractora en la misma provincia	1071
Moción presentada por doña María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre, en relación con la interpelación defendida en el Pleno del Congreso sobre la industria de construcción naval ...	1067	Contestación del Gobierno a la pregunta formulada por el señor Carro Martínez sobre subvención al Centro ocupacional "N. O. S." de Monforte de Lemos	1072
Moción presentada por doña Pilar Brabo Castells, en relación con la interpelación defendida en el Pleno del Congreso que hacía referencia a la situación de la Universidad de Alcalá de Henares.	1068	Contestación del Gobierno a la pregunta formulada por los señores Ruiz Risueño y Moreno García sobre Plan de electrificación rural	1072
Preguntas formuladas por don Ra-		SENADO	
		Informe emitido por la Ponencia designada en el seno de la Comisión de Reglamento para estudiar el proyecto de incorporación al Reglamento del Senado de un nuevo Título regulando la moción	

	Páginas		Páginas
de censura y la cuestión de confianza	1073	Ruego formulado por don Félix Pérez y Pérez sobre expansión de la ganadería equina en zonas de montaña	1078
Constitución de las Comisiones especiales de "Investigación para la comercialización de los Productos Agrarios" e "Investigación para la comercialización de los Productos Pesqueros"	1076	Ruego formulado por don Félix Pérez y Pérez sobre cambio de denominación del Ministerio de Agricultura	1079
Ruego formulado por don José García García sobre actualización del Catastro Fotográfico-parcelario de Rústica en la provincia de Pontevedra	1077	Contestación del Gobierno al ruego formulado por don José García García sobre accidentes de tráfico en la Carretera Nacional 525, entre los p. k. 610 y 639	1080

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento vigente provisional del Congreso de los Diputados, de 17 de octubre de 1977, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES, Congreso de los Diputados, de la solicitud de interpelación que a continuación se inserta.

Transcurridas dos semanas desde su presentación, se incluirá sin más en el orden del día de la primera sesión siguiente, con arreglo al artículo 126 del citado Reglamento.

Palacio de las Cortes, 9 de febrero de 1978.—El Presidente del Congreso de los Diputados, **Fernando Alvarez de Miranda**.

Interpelación que presenta don Angel Perera Calle, Diputado del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, al amparo de lo prevenido en los artículos 125 y siguientes del Reglamento provisional del Congreso.

En el Pacto de la Moncloa, y en el apartado H) del título VI, "Reforma de la Seguridad Social", al tratar del tema "Pensiones", se dice

"Para el año 1978, y con efectos a partir del 1. de enero, se incrementará la masa global de las pensiones en un 30 por ciento y se distribuirá su cuantía de forma que incida progresivamente a las más reducidas."

Efectivamente, y previo acuerdo del Consejo de Ministros, se ha procedido al aumento de las pensiones. Así, en lo que se refiere a las de jubilados, se ha procedido a un aumento que consiste en:

- 1.º Fijar las pensiones en un mínimo de 9.300 pesetas.
- 2.º Aplicar sobre las pensiones actuales los siguientes porcentajes de incremento:

	Porcentaje
Hasta las citadas 9.300 pesetas.	13
El exceso hasta 15.300 pesetas, aplicarle el	9
De 15.301 hasta 21.300 pesetas, aplicarle el	5
El exceso de 21.300 pesetas	1

De manera que, tomando como ejemplo los topes de cada grupo, los aumentos, hechos efectivos ya en el mes de enero, han significado:

- Para los que percibían el tope anterior mínimo (7.000 pesetas), el 32,8

- por ciento y pasan ahora a 9.300 pesetas.
- Para los que percibían 15.300 pesetas, el 11,4 por ciento.
 - Para los que percibían 21.300 pesetas, el 9,6 por ciento.
 - Y si tomamos como base de cálculo una pensión actual de 30.300 pesetas, el incremento de la pensión en enero de 1978 representa un 7 por ciento.

Sin poseer los datos precisos para hacer cálculos matemáticos, es evidente que estas cifras y ejemplos demuestran claramente que se ha seguido, en los aumentos, la directriz formulada por el acuerdo del Consejo de Ministros, de hacer en enero un aumento global del 15 por ciento, dejando para el mes de julio el aumento complementario hasta cubrir el 30 por ciento indicado en el Pacto.

Pero esta directriz está en contradicción con lo que se acordó en el Pacto: que el aumento global del 30 por ciento se efectuaría, y así constá expresamente en el texto de los acuerdos "con efectos a partir del 1 de enero".

Si no es admisible, en ningún caso, el incumplimiento de los Pactos firmados, lo es menos todavía, si cabe, cuando se trata de perjudicar los intereses de los trabajadores ancianos que no tienen otros recursos de vida que los derivados de unas pensiones, cuyo poder adquisitivo se ha ido mermando con el paso de los años, y a las que, todo daba a entender que el Pacto de la Moncloa deseaba dar trato preferente en relación con el trabajador en activo, con el objeto de erosionar en menor cuantía sus recursos propios, cuando no mejorarlos en sus niveles más bajos. Pero no es así. Si no se rectifica el proceder aplicando la letra y el espíritu del Pacto de la Moncloa, el global de las pensiones abonadas en 1978, será sensiblemente, en porcentaje, el mismo que se ha legislado para la masa salarial bruta, el 22 por ciento.

Y esto está en contraposición, no sólo con el espíritu de lo pactado —y ampliamente difundido por medios oficiales—, sino también con el texto literal, que deja, sin lugar a dudas, que el aumento glo-

bal del 30 por ciento entrara en vigor en 1 de enero de 1978.

Sin entrar en el detalle de si la fórmula de aumentos adoptada responde a criterios aceptables o discutibles (como puede serlo el 7 por ciento de aumento a pensiones de 30.000 pesetas), esta interpelación se dirige fundamentalmente a exigir del Gobierno la aplicación estricta de lo acordado en el Pacto de la Moncloa: un aumento global del 30 por ciento de las pensiones de jubilación con efectos a partir del 1 de enero de 1978, y no lo que acordó el Consejo de Ministros de hacerlo en dos plazos, incumpliendo el Pacto en la fecha y en el porcentaje global.

En base a lo expuesto anteriormente, la interpelación al Gobierno se concreta en si éste se encuentra dispuesto a cumplir el Pacto de la Moncloa en los estrictos términos en que quedó suscrito, y, en su caso, en qué manera interpreta que dicho cumplimiento ha sido respetado en la aplicación del incremento de las pensiones de la Seguridad Social.

Madrid, 8 de febrero de 1978.—**Angel Perera Calle.**—El Portavoz del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, **Miguel Roca Junyent.**

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento vigente provisional del Congreso de los Diputados, de 17 de octubre de 1977, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES, Congreso de los Diputados, de la solicitud de interpelación que a continuación se inserta.

Transcurridas dos semanas desde su presentación, se incluirá sin más en el orden del día de la primera sesión siguiente, con arreglo al artículo 126 del citado Reglamento.

Palacio de las Cortes, 9 de febrero de 1978.—El Presidente del Congreso de los Diputados, **Fernando Alvarez de Miranda.**

Interpelación sobre las recientes medidas del Gobierno relativas a las bases y tipos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social y a su incidencia en la negociación de convenios colectivos.

Ciriaco de Vicente Martín, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Socialista del Congreso, haciendo uso de la facultad prevista en los artículos 125 y siguientes del Reglamento provisional del Congreso, presenta al Gobierno una interpelación en relación con las Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, recientemente fijados por el Gobierno para el año 1978 y con su incidencia en los convenios colectivos en negociación.

La interpelación se fundamenta en los siguientes extremos:

Primero.—La limitación al 18 por ciento del crecimiento de las cuotas de la Seguridad Social durante 1978 establecida en el llamado Acuerdo de la Moncloa.

Segundo.—La publicación del Decreto 95/1978, de 25 de enero, por el que el Gobierno ha dictado normas de cotización al Régimen General de la Seguridad Social, estableciendo los valores de las Bases tarifada y complementaria individual para 1978, así como el tipo unificado de cotización aplicable a ambas, y asimismo la publicación, ya en febrero del presente año, de una Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social por la que se fija el tope máximo de cotización de la base complementaria individual.

Tercero.—Las consecuencias negativas que las mencionadas medidas del Gobierno han tenido y tienen en la negociación colectiva en los términos previstos por el Decreto-ley, consecuencias que recaen sobre la clase trabajadora.

Cuarto.—La necesidad de que el pueblo español cuente con la información de la que hoy carece sobre la actual situación financiera de la Seguridad Social, sobre los depósitos del Gobierno relativos a la financiación del Régimen General de la Seguridad Social (especialmente en relación con la política salarial y con la política de empleo), y sobre los procesos de recauda-

ción por parte de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

Palacio de las Cortes, 8 de febrero de 1978.—**Ciriaco de Vicente Martín**. El Portavoz del Grupo Parlamentario, **Alfonso Guerra González**.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento vigente provisional del Congreso de los Diputados, de 17 de octubre de 1977, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES, Congreso de los Diputados, de la solicitud de interpelación que a continuación se inserta.

Transcurridas dos semanas desde su presentación, se incluirá sin más en el orden del día de la primera sesión siguiente, con arreglo al artículo 126 del citado Reglamento.

Palacio de las Cortes, 10 de febrero de 1978.—El Presidente del Congreso de los Diputados, **Fernando Alvarez de Miranda**.

A la Mesa del Congreso: Manuel Chaves González, Ramón Vargas Machuca, Jerónimo Sánchez Blanco y Pedro Jiménez Galán, todos ellos Diputados por la provincia de Cádiz y pertenecientes al Grupo Parlamentario de Socialistas del Congreso, en base a lo establecido en los artículos 125 y siguientes del Reglamento provisional del Congreso, presentan al Gobierno la siguiente interpelación:

El Decreto 2.250/1972, de 21 de julio, en su artículo 15, declara a la Costa Noroeste de Cádiz —lo que actualmente se conoce como el triángulo San Lúcar de Barrameda-Chipiona—, como zona regable de interés nacional y, en consecuencia, merecedora de una acción especial. Con fecha 1 de enero de 1973 se constituyó la Comisión Técnica Mixta compuesta por representantes de los Ministerios de Agricultura y de Obras Públicas, aprobándose posterior-

mente por Decreto, en el Consejo de Ministros de 17 de julio de 1975, el Plan General de Transformación de esta zona.

La ejecución de las obras previstas en este Plan General son de una fundamental importancia para una zona, como la del triángulo citado, en las que el paro estimado, fundamentalmente el agrícola, alcanza índices aproximados al 100 por ciento en determinadas épocas del año. La puesta en ejecución de las obras previstas podría dar lugar a la creación de 5.000 puestos de trabajo que aliviarían la situación de paro.

Por todo lo expuesto, interpelamos al Gobierno para que dé cuenta detallada del estado actual del Plan General de Transformación y de las fechas previstas del comienzo de la ejecución del mismo.

Palacio de las Cortes, 9 de febrero de 1978.—**Manuel Chaves González, Ramón Vargas Machuca, Jerónimo Sánchez Blanco y P. Jiménez Galán.** El Portavoz del Grupo, **Felipe González Márquez.**

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con las normas de desarrollo del artículo 127 del vigente Reglamento, dictadas por el Presidente del Congreso, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES de la siguiente moción presentada por doña María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre, en relación con la interpelación defendida en el Pleno del Congreso sobre la industria de construcción naval.

Palacio de las Cortes, 10 de febrero de 1978.—El Presidente del Congreso de los Diputados, **Fernando Alvarez de Miranda.**

Moción al Congreso sobre la industria de construcción naval

Presentada una interpelación al Gobierno sobre la situación y perspectivas de la industria de construcción naval, en la sesión del Pleno del Congreso de 23 de diciembre último, y considerando que la respuesta dada por el Ministro de Industria

a las preguntas concretas que se le formularon no llevó al sector afectado la esperanza que se pretendía, de acuerdo con el artículo 127 del Reglamento provisional del Congreso de los Diputados, se presenta ante la Cámara la presente moción instando al Gobierno a que adopte una política clara, eficaz y urgente en apoyo de este sector industrial y de los muchos españoles que de él dependen.

La construcción naval es uno de los sectores industriales de mayor incidencia en el desarrollo nacional. Esta afirmación se basa en los siguientes hechos:

- Su capacidad de generar empleo y de industrializar su entorno. Más de 50.000 hombres trabajan directamente en el sector y más de 120.000 en las diversas industrias auxiliares de la construcción naval.
- Su contribución al desarrollo de la marina mercante nacional, a la que ha entregado más de cuatro millones de toneladas en los últimos cinco años.
- Su penetración en los mercados exteriores, con unas exportaciones que sobrepasan los 1.500 millones de dólares en los últimos cinco años.
- Su nivel tecnológico.
- Unos 700 buques de proyecto español navegan bajo banderas de más de 50 países extranjeros.

Tres son los principales motivos por los que este sector industrial resulta insustituible en nuestra patria:

En primer lugar, es la industria con mayor incidencia en las zonas menos desarrolladas del país. Cualquier plan de descentralización industrial tiene que contar con este sector.

En segundo lugar no existe otra industria que pueda sustituirla aprovechando la alta capacidad técnica de los hombres que trabajan en este sector, con una larga tradición y un profundo arraigo.

Mientras en algunos países de Europa la movilidad de la mano de obra es en esta actividad de más de un 25 por ciento, en España es prácticamente nula.

Por último, es uno de los pocos sectores con técnicas propias y desarrolladas en condiciones de exportar no sólo productos, sino también tecnología.

En base a los anteriores argumentos, y ante la urgencia de tomar medidas eficaces, medidas que debieron tomarse hace ya tiempo, cuando se desarrollaron en los principales países europeos, este grupo parlamentario estima necesario instar al Gobierno con las siguientes propuestas:

1. Que el Gobierno informe al Congreso de la situación del concurso convocado por el Decreto 1.285/1976, y de sus ideas concretas para sostener una razonable demanda continuada para este sector, tanto en el campo de la marina mercante como de la militar.

2. Que el Gobierno adopte cuantas medidas pueda para que los buques construidos para la Marina Mercante sean financiados en condiciones competitivas con las de otros países.

3. Que el Gobierno active cuanto pueda, dentro del plazo establecido por el Decreto 2.841/1977, el plan de reestructuración y diversificación del sector, que defendiendo al máximo el empleo en el mismo, lo coloque en condiciones de competir en el futuro mercado.

4. Que el Gobierno proponga al Congreso, al mismo tiempo que el referido plan, un conjunto de ayudas específicas que permitan la supervivencia de las empresas del sector hasta que esa nueva situación se logre.

Madrid, 7 de febrero de 1978.—**María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre**, Diputado de Alianza Popular. El Portavoz del Grupo Parlamentario, **Manuel Fraga Iribarne**.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con las normas de desarrollo del artículo 127 del vigente Reglamento, dictadas por el Presidente del Congreso, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFI-

CIAL DE LAS CORTES de la siguiente moción presentada por doña Pilar Brabo Castells, en relación con la interpelación defendida en el Pleno del Congreso que hacía referencia a la situación de la Universidad de Alcalá de Henares.

Palacio de las Cortes, 10 de febrero de 1978.—El Presidente del Congreso de los Diputados, **Fernando Alvarez de Miranda**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados: Al amparo de lo establecido en el artículo 127 del vigente Reglamento provisional del Congreso de los Diputados, presento la siguiente moción, en relación con la interpelación defendida en el Pleno del Congreso que hacía referencia a la situación de la Universidad de Alcalá de Henares.

Texto de la moción

“En la búsqueda de una solución eficaz a la situación conflictiva por la que atraviesa el “campus” universitario de Alcalá de Henares, la interpelante considera necesario:

1. El funcionamiento democrático de las Juntas de Facultad, ampliando su composición, al amparo del artículo 68 de los Estatutos de la Complutense.

2. Que la Universidad de Alcalá de Henares, con su carácter de Universidad en proceso de promoción, funcione bajo tutela de la Universidad Complutense y que las decisiones de la Comisión Gestora sean conocidas por la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense, antes de su puesta en práctica.

3. Que la Comisión Gestora consulte a las Juntas de Facultad por crear de la Universidad de Alcalá de Henares, y las haga coparticipes del funcionamiento y la gestión de la Universidad. Del mismo modo creemos que es necesario que se arbitren los medios para que la Universidad de Alcalá de Henares pueda participar en la consulta que sobre la Ley General de Universidades ha planteado el Ministerio, y que las respuestas a esa consulta sean elaboradas democráticamente.

4. Que se proceda a la revisión de la situación de los alumnos expulsados este curso y del profesor Enrique Curiel, como consecuencia de la aplicación de unas normas de funcionamiento, que al parecer el Ministerio se ha comprometido a revisar. Asimismo, que en lo sucesivo no se den situaciones que discriminen a los alumnos de Alcalá de Henares respecto a los de otras Universidades.”

Palacio de las Cortes, 16 de enero de 1978.—Pilar Brabo Castells, Miembro del Grupo Parlamentario Comunista.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación de las preguntas que a continuación se insertan.

Palacio de las Cortes, 9 de febrero de 1978.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Fernando Alvarez de Miranda.

A la Mesa del Congreso de los Diputados: En los acuerdos firmados por los partidos políticos con representación parlamentaria que han venido en llamarse Pactos de la Moncloa, se especificaba en el apartado a) del capítulo IX, titulado “Política Energética y Estatuto de la Empresa Pública”, que el Gobierno quedaba comprometido a “remitir a las Cortes, antes de fin de año, un nuevo Plan Energético, compatible con la necesaria conservación del medio ambiente, que apunte a contener y —si ello fuera posible— a disminuir la intensidad y elasticidad del consumo energético...”.

Ante el hecho evidente de que el Gobierno no ha cumplido el citado compromiso, el Diputado firmante del presente escrito, y al amparo del artículo 128 del vigente Reglamento provisional del Congreso de los Diputados, presenta las preguntas que se especifican con el ánimo de precisar y conocer los criterios del Gobierno sobre diversas cuestiones.

Motivación

Durante muchos años la financiación de las empresas eléctricas, es decir, de sus inversiones en centrales hidráulicas, térmicas y nucleares, así como de sus compras de equipos, se ha llevado a cabo por medio de los planes de acción concertada con el Estado. En la práctica estos planes de acción concertada han supuesto que la financiación de los altamente rentables monopolios eléctricos se ha hecho en su mayor parte con fondos públicos o con los de las Cajas de Ahorro. Esta situación se ha puesto todavía más de manifiesto con el programa nuclear español, ya que las siete centrales nucleares actualmente en construcción y las otras siete que se piensa edificar en los próximos años suponen unas inversiones auténticamente gigantescas. (Cada una de estas nuevas centrales puede requerir una inversión cercana a los mil millones de dólares.) La cuantía de estas inversiones sigue estando muy por encima de las posibilidades de autofinanciación de las compañías eléctricas, y los Estados Unidos sólo financian a través del Export-Import Bank los equipos que tienen que importarse de ese país. En la práctica se produce una situación en la cual la financiación de los monopolios eléctricos la costean todos los españoles a través de sus impuestos, de sus ahorros y del endeudamiento exterior, mientras que la rentabilidad de estas inversiones va a parar exclusivamente a una minoría de accionistas, y muy fundamentalmente a una reducida oligarquía dentro de esta minoría. En el caso de la energía nuclear ocurre además que la intervención del Estado a través de sus instituciones y empresas públicas es absolutamente esencial para llevar a cabo aspectos esenciales del ciclo del combustible nuclear, tales como el suministro del uranio natural, su enriquecimiento, la fabricación de elementos combustibles, y la gestión del combustible irradiado en las centrales. Para completar la situación es preciso mencionar que la ciudadanía también se ve obligada a asumir los potenciales riesgos derivados del uso de la energía nuclear. Todo esto revela la incoherencia

existente en un sector de la economía que en la gran mayoría de los países civilizados es un sector público tal y como debe corresponder al carácter de servicio público que la producción y distribución de energía eléctrica tiene en una sociedad moderna. Si la financiación de las inversiones, los riesgos y el suministro de servicios esenciales para la energía nuclear son asumidos de una manera pública por toda la colectividad, es totalmente incongruente que la propiedad, explotación y beneficios de la energía eléctrica continúen en manos privadas. Por todo esto es preciso el conocer los proyectos que el Gobierno tiene para hacer realidad, de un modo efectivo, el legítimo derecho que tiene la sociedad española a controlar los monopolios de la energía eléctrica.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Comunista propone las siguientes preguntas.

¿Cuáles son los planes del Gobierno para garantizar la gestión adecuada de los fondos y del ahorro público, usados en la financiación de las inversiones eléctricas?

¿Cuáles son los criterios que se han seguido o que se seguirán para garantizar un emplazamiento adecuado y unas óptimas medidas de seguridad de las instalaciones nucleares que se están construyendo o se pretende construir?

¿Cuáles son los planes de compensación existentes para las zonas de España que tengan que experimentar riesgos potenciales particularmente altos, como consecuencia de la presencia cercana de centrales u otras instalaciones nucleares?

¿Cuáles son los planes del Gobierno en relación con el combustible irradiado en las centrales nucleares españolas?

Palacio de las Cortes, 8 de febrero de 1978.—**Ramón Tamames Gómez**, Miembro del Grupo Parlamentario Comunista.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento del Congreso de los Diputa-

dos, se ordena la publicación de la pregunta que a continuación se inserta.

Palacio de las Cortes, 9 de febrero de 1978.—El Presidente del Congreso de los Diputados, **Fernando Alvarez de Miranda**.

Al señor Presidente del Congreso de los Diputados:

Enrique Sapena Granell, Diputado del Grupo Parlamentario "Grupo Socialista del Congreso" por la provincia de Valencia, presenta para su formulación al Gobierno, a tenor de lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente pregunta, respecto a la cual este Diputado declara que pretende obtener una respuesta escrita según lo dispuesto en el artículo 133 del propio Reglamento del Congreso de los Diputados.

Antecedentes

Con fecha 18 de marzo de 1976 se promulgó el Decreto 840/1976, que dejaba nulas, y sin efecto alguno, todas las sanciones impuestas por responsabilidades políticas a los funcionarios de Corporaciones y Empresas concesionarias de Servicios Públicos. Desde aquella fecha, los ferroviarios represaliados comprendidos en la edad de jubilación, vienen solicitando y esperando que se les aplique el referido Decreto y que se les concedan los beneficios que les correspondan a ellos, a sus viudas y a sus hijos incapacitados.

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) les ha contestado que es a la Mutualidad Nacional de la Seguridad Social a quien corresponde resolver.

A la Mutualidad de la Seguridad Social se han dirigido repetidas veces por escrito suplicando la urgencia de la resolución y la Mutualidad ni siquiera ha tenido la delicadeza de contestar con el acuse de recibo.

Pregunta

El Diputado que suscribe pretende conocer del Gobierno:

1.º Si existe voluntad de interpretar di-

cho Decreto en el sentido de que para todos aquellos que justifiquen haber estado al servicio de las órdenes de la República, como lo fueron todos los compañeros represaliados ferroviarios que murieron en el frente, fueron fusilados, desaparecidos o muertos como consecuencia de los malos tratos, no se tengan en cuenta las exigencias reglamentarias.

2.º Si por el tiempo transcurrido desde la puesta en vigor del Decreto 840/1976, se va a iniciar un trámite de urgencia para que los afectados y sus deudos cobren los derechos pasivos que les correspondan.

3.º Fecha que muy aproximadamente puede fijar la iniciación del cobro de dicho derecho pasivo.

Palacio de las Cortes, 7 de febrero de 1978.—**Enrique Sapena Granell**. El Portavoz del Grupo Socialista del Congreso, **Alfonso Guerra González**.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación de las preguntas que a continuación se insertan.

Palacio de las Cortes, 9 de febrero de 1978.—El Presidente del Congreso de los Diputados, **Fernando Alvarez de Miranda**.

Al Presidente del Congreso de los Diputados:

Virgilio Zapatero Gómez, Diputado del Grupo Socialista del Congreso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y siguientes del Reglamento provisional del Congreso de los Diputados, tiene el honor de solicitar que por el Ministerio de Agricultura se responda ante la Comisión de Agricultura del Congreso a las siguientes preguntas que formulo sobre la política de su Departamento en el tema de la producción de semilla de girasol en la provincia de Cuenca, y especialmente sobre los propósitos de ese Ministerio en cuan-

to a la solicitada construcción en Cuenca de una Planta Extractora.

Motivación

Uno de los muchos problemas que preocupan a la provincia que represento es la industrialización de sus productos fuera de Cuenca. Tal es el caso de la semilla de girasol, que hace unos meses dio lugar a las protestas de los agricultores conqueses exigiendo unos precios más rentables, así como la construcción en Cuenca de una Planta Extractora.

El proyecto de construcción de tal Planta ha sido ya presentado ante ese Departamento el 24 de septiembre del año pasado, siendo de destacar a este respecto la impenetrabilidad informativa de la Administración, pues la información ha sido, y es, insuficiente.

Puesto que, al parecer, se trata de una empresa en la que participará, junto al capital privado, medios financieros del Estado (a través del INI) y recursos económicos de la provincia (a través de la Caja de Ahorros de Cuenca), sería de desear una clara y diáfana información sobre este proyecto en todos sus detalles, así como una exposición de los estudios que el Ministerio de Agricultura haya podido realizar sobre su viabilidad técnica y económica.

En segundo lugar, parece lógico que las industrias se sitúen allí donde se encuentren las materias primas. En este orden de cosas, ocioso sería recordar que Cuenca produce casi la cuarta parte de la producción total de semilla de girasol y que es la primera provincia productora de tal semilla.

Parece lógico también que, a la hora de localizar una industria, se tenga en cuenta la penuria y, al mismo tiempo y por ello, la necesidad de industrialización de una determinada provincia. Si esto es así, creo que a Cuenca le asisten todos los derechos para que tal Planta Extractora se asiente en su territorio, pues su industrialización es una de las más bajas de España.

Esta localización en cuenta de tal industria está tanto más justificada cuanto que

se trata de una industria agraria que evitaría la salida, sin industrializar, de uno de nuestros recursos naturales y que, por ello, generaría en Cuenca la riqueza que hoy genera para otras provincias. La recuperación de nuestros recursos naturales es hoy uno de los objetivos de todas las fuerzas democráticas de la provincia.

En este sentido, considero de todo punto necesario que el Excelentísimo señor Ministro de Agricultura exponga ante la Comisión de Agricultura del Congreso su criterio sobre la proyectada Planta Extractora que Cuenca pide, y cuya construcción depende, en principio, de la preceptiva autorización del Ministerio de Agricultura.

Palacio de las Cortes, 8 de febrero de 1978.—**Virgilio Zapatero Gómez**, Diputado por Cuenca. El Portavoz del Grupo Socialista del Congreso, **Felipe González Márquez**.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento provisional del Congreso, se ordena la publicación de la contestación del Gobierno a la pregunta formulada al mismo por el Diputado señor **Carro Martínez**.

Palacio de las Cortes, 9 de febrero de 1978.—El Presidente del Congreso de los Diputados, **Fernando Alvarez de Miranda**.

Excelentísimo señor: En relación con la pregunta formulada por don **Antonio Carro Martínez**, sobre subvención al Centro ocupacional "N. O. S.", de Monforte de Lemos, cuya publicación se realizó en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES número 47, tengo la honra de enviar a V. E. la contestación formulada por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, cuyo contenido es el siguiente:

"Existen dos peticiones de ayuda al Fondo Nacional de Protección al Trabajo del Centro Ocupacional "N. O. S.", inscrito con el número 57 en la Sección Especial del Re-

gistro de Entidades Colaboradoras del SEREM.

La primera solicitud de ayuda fechada el 9 de diciembre de 1977, para la construcción del Centro Ocupacional asciende a 10.154.567 pesetas. Examinada la documentación por Técnicos de este Servicio se emitió informe favorable a la Dirección General, proponiendo la concesión de 9.513.979 pesetas el 14 de diciembre de 1977. La Dirección General de Servicios Sociales como Organismo Gestor remite al Fondo Nacional de Protección al Trabajo este expediente.

La segunda solicitud de ayuda, fechada el 20 de octubre de 1977, para la adquisición de maquinaria, utillaje, materias primas, mobiliario y material necesario para la realización de actividades productivas de alfarería y servicios complementarios asciende a 3.041.782 pesetas. Examinada la documentación por técnicos de este Servicio, se emitió informe favorable a la Dirección General, proponiendo la concesión de 1.878.482 pesetas, el 13 de diciembre de 1977. La Dirección General de Servicios Sociales, como Organismo Gestor, remite al Fondo Nacional de Protección al Trabajo este expediente en fecha 22 de diciembre de 1977.

De lo anterior se deduce que ambos expedientes están en la actualidad pendientes de la Resolución del Patronato del Fondo Nacional de Protección al Trabajo."

Lo que de orden del señor Ministro de Sanidad y Seguridad Social envió a V. E. a los efectos previstos en el artículo 133 del Reglamento provisional del Congreso.

Dios guarde a V. E.

El Secretario General de Relaciones con las Cortes, **Rafael Arias-Salgado y Montalvo**.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento provisional del Congreso, se ordena la publicación de la contestación del Gobierno a la pregunta

formulada al mismo por los Diputados señores Ruiz Risueño y Moreno García.

Palacio de las Cortes, 9 de febrero de 1978.—El Presidente del Congreso de los Diputados, Fernando Alvarez de Miranda.

Excelentísimo señor: En relación con la pregunta formulada por don Francisco Ruiz Risueño y don José Luis Moreno García (UCD), sobre Plan de Electrificación Rural, cuya publicación se realizó en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES número 52, tengo la honra de enviar a V. E. la contestación formulada por el Ministerio de Industria y Energía, cuyo contenido es el siguiente:

“1.º El Gobierno ha tomado el acuerdo de retirar la propuesta de Ley de Electrificación Rural, con objeto de modificar la disposición de los aspectos técnicos del Plan Nacional de Electrificación Rural y adecuarlas a las demandas previstas en el Plan Energético Nacional, que será sometido en breve a la aprobación del Gobier-

no por el Ministerio de Industria y Energía.

2.º Igualmente se está procediendo al estudio de alternativas que permitan la financiación de las obras y a la determinación de los criterios de prioridad para la ejecución de las mismas.

3.º Es consciente el Ministerio de Industria y Energía de las deficiencias de las redes eléctricas rurales en la provincia de Albacete y de la trascendencia de su ampliación y mejora, habiéndose previsto la electrificación necesaria para la extracción de los caudales de agua subterránea que facilitarán los regadíos en las zonas que actualmente tienen una baja productividad.”

Lo que de orden del señor Ministro de Industria y Energía envió a V. E. a los efectos previstos en el artículo 133 del Reglamento provisional del Congreso.

Dios guarde a V. E.

El Secretario General de Relaciones con las Cortes, **Rafael Arias-Salgado y Montalvo**.

SENADO

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento provisional del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES del informe emitido por la Ponencia designada en el seno de la Comisión de Reglamento para estudiar el proyecto de incorporación al Reglamento del Senado de un nuevo Título regulando la moción de censura y la cuestión de confianza en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición adicional primera del vigente Reglamento:

“La Ponencia constituida en la Comisión de Reglamento, compuesta por los señores Senadores don Justino de Azcárate Flórez, don Carlos Calatayud Maldonado, don Diego Cambreleng Roca, don Francisco García-Borbolla Candilejo, don Enrique

Iparraguirre García, doña María Belén Landáburu González, don David Pérez Puga, don Joaquín Navarro Estevan, don Antonio Rodríguez Reguera y don Luis Sánchez Agesta, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición adicional primera del vigente Reglamento del Senado, ha elaborado el siguiente proyecto:

TITULO DECIMO

DE LA MOCION DE CENSURA Y LA CUESTION DE CONFIANZA

Sección Primera

De la moción de censura

Artículo 137

1. Las mociones que impliquen censura al Gobierno o a cualquiera de sus miem-

bros se presentarán por escrito a la Mesa del Senado cuando se tramiten en esta Cámara.

2. El procedimiento contenido en el presente Título se aplicará a las mociones de censura que se formulen expresamente como tales.

3. El escrito de presentación de una moción de censura deberá contener los motivos detallados en que se funde y estar firmados, al menos, por un Grupo parlamentario o treinta y cinco Senadores.

Artículo 138

La sesión plenaria en la que discuta la moción de censura tendrá como único punto del orden del día el estudio de dicha moción, salvo lo dispuesto en el artículo 140.3, y deberá celebrarse no antes de que transcurran cinco días, contados desde el siguiente a su presentación, ni después de los diez posteriores a la misma. La documentación relativa a la moción de censura estará a disposición de los Senadores con tres días de antelación a la celebración de dicho Pleno. El Presidente de la Cámara comunicará inmediatamente al del Congreso la fecha y hora de su presentación.

Artículo 139

1. En el debate de la moción de censura podrán consumirse tres turnos a favor y tres en contra, por tiempo no superior a media hora cada uno. Los oradores que hubiesen intervenido en dichos turnos podrán hacer de nuevo uso de la palabra, por una sola vez y durante diez minutos como máximo, para rectificar. Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, antes de la votación, podrán intervenir en el debate para explicar el voto de sus respectivos grupos por un tiempo máximo de diez minutos. Tras todas estas intervenciones concluirá el debate, sometiéndose a votación la moción de censura, que quedará rechazada en el Senado si no es aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

2. Aprobada por el Senado una moción de censura, su Presidente dará inmediata-

mente traslado del acuerdo adoptado al Congreso de los Diputados y al Presidente de las Cortes, a los efectos oportunos.

Artículo 140

1. Cuando se hubieran planteado en el Senado y en el Congreso varias mociones de censura contra el Gobierno o contra alguno de sus miembros, se iniciará el trámite por la que se hubiese presentado primero en cualquiera de las dos Cámaras y mientras dicha tramitación esté en curso no podrá iniciarse el examen de las restantes.

2. Si en el Senado se hubiesen presentado varias mociones de censura, se estará a lo dispuesto en el apartado anterior.

3. El Senado, a propuesta de la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, podrá decidir, por mayoría simple, que se acumulen y tramiten conjuntamente varias mociones de censura, siempre y cuando exista entre ellas identidad de materia o de personas frente a las que se presentan. El Senado adoptará, sin debate, la correspondiente decisión al comienzo de la misma sesión plenaria en la que haya de debatirse la moción de censura presentada en el primer término.

Artículo 141

Si la moción de censura es rechazada definitivamente por las Cortes, los Senadores o los Grupos Parlamentarios que la hubiesen firmado no podrán presentar otra, salvo en el caso previsto en el artículo 144, hasta que hayan transcurrido tres meses, contados desde el día siguiente a aquel en que se produjo la votación. Las mociones de censura presentadas con anterioridad a la discusión de la primera y no acumuladas a ésta, suscritas por los mismos Senadores o Grupos parlamentarios firmantes de una rechazada, seguirán su tramitación, en cualquier caso, conforme a lo previsto en los artículos 138, 139 y 140.

Artículo 142

Las mociones de censura que no sean defendidas por algún Senador se entenderán retiradas.

Sección segunda

De la cuestión de confianza

Artículo 143

La cuestión de confianza que el Gobierno plantee en el Senado se regulará conforme a lo previsto en esta Sección.

Artículo 144

El Gobierno puede plantear en el Senado la cuestión de confianza sobre la aprobación de un proyecto de ley que incorpore las bases de su actuación programática en supuestos de especial trascendencia para el país. El proyecto quedará aprobado a menos que se presente una moción de censura contra el Gobierno dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se plantee la cuestión de confianza. Se entenderá planteada en el Senado la cuestión de confianza cuando se hubiese planteado ya en el Congreso, sin que llegara a aprobarse en éste una moción de censura con ocasión de dicho planteamiento.

Artículo 145

1. La cuestión de confianza sólo podrá plantearse en el debate de totalidad en el Pleno de los proyectos de ley, antes de procederse a la votación. El Gobierno deberá, en este caso, hacer constar de forma expresa el planteamiento de la cuestión de confianza.

2. Si el Gobierno plantea la cuestión de confianza en el Senado sobre la aprobación de un proyecto de ley, se suspenderá la tramitación del mismo, en el estado en que se encuentre, hasta que no se ultime el trámite de la cuestión de confianza regulado en esta misma Sección.

Artículo 146

De formularse una moción de censura en el Senado con ocasión del planteamiento de la cuestión de confianza, se presentará, debatirá y votará en la forma prevista en los artículos 137 a 140 y 144.

Artículo 147

1. Si se rechaza una moción de censura presentada en el Senado con ocasión del planteamiento de la cuestión de confianza, el proyecto de ley objeto de la misma quedará definitivamente aprobado por las Cortes.

2. Aprobada una moción de censura en el Senado con motivo del planteamiento de la cuestión de confianza, la Presidencia de la Cámara dará traslado del acuerdo adoptado al Congreso de los Diputados a los efectos oportunos. El proyecto de ley quedará definitivamente rechazado si la moción de censura es aprobada finalmente por las Cortes.

Artículo 148

El Gobierno no podrá presentar la cuestión de confianza sobre la aprobación de un proyecto de ley más de una vez en el plazo de tres meses y nunca más de tres veces dentro del mismo período de sesiones.

Artículo 149

Salvo lo dispuesto en el presente Título, las deliberaciones y votaciones en el Pleno al tratarse una moción de censura se someterán a la regulación general establecida en el Título Quinto de este Reglamento.

Artículo 150

Los preceptos de este Título sólo serán aplicables hasta la entrada en vigor de la Constitución.

Justino Azcárate Flórez, Carlos Calatayud Maldonado, Diego Cambreleng Roca, Francisco García-Borbolla Candilejo, Enrique Iparraguirre García, María Belén Landáburu González, David Pérez Puga, Joaquín Navarro Estevan, Antonio Rodríguez Reguera y Luis Sánchez Agesta."

La Presidencia del Senado ordena su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES, abriéndose un plazo de diez días naturales para la presentación de enmiendas,

contados a partir de la fecha de esta publicación.

Palacio del Senado, 10 de febrero de 1978.—El Presidente del Senado, **Antonio Fontán Pérez**; El Secretario Primero del Senado, **Víctor Carrascal Felgueroso**.

PRESIDENCIA DEL SENADO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 del vigente Reglamento provisional del Senado, han quedado constituidas las siguientes Comisiones Especiales:

1.^a DE INVESTIGACION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS

Alonso Novo, don Manuel
Ball Armengol, don José
Ballarín Marcial, don Alberto
Borque Guillén, don Jesús
Calatayud Maldonado, don Carlos
Cordero del Campillo, don Miguel
Damas Rico, don Pedro Manuel
Delgado y Sánchez-Arjona, don Manuel
García Tabernero, don Vidal
Landáburu González, doña María Belén
Martínez Fuertes, don Angel
Miranzo Martínez, doña Amalia
Morales Liñán, don Cipriano
Oregui Goenaga, don Ignacio
Ortega Spottorno, don José
Padrón Padrón, don Federico
Palomo Saavedra, don Félix
Picazo González, don Andrés José
Piñero Fernández, don Luis
Primo de Rivera y Urquijo, don Miguel
Royo-Villanova Payá, don Alejandro
Rubies Garrofé, doña María
Sánchez Reus, don Luciano
Ulloa Vence, don Julio
Zarrías Jareño, don Juan

De acuerdo con lo prevenido en el artículo 39,2 del vigente Reglamento, la Mesa de dicha Comisión se integra de la siguiente forma:

Presidente: don Carlos Calatayud Maldonado.

Vicepresidente Primero: don Juan Zarrías Jareño.

Vicepresidente Segundo: don Pedro Manuel Damas Rico.

Secretario Primero: don Cipriano Morales Liñán.

Secretario Segundo: don Jesús Borque Guillén.

2.^a DE INVESTIGACION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS

Alonso del Real Montes, don Guillermo
Barrios Dorta, don José Manuel
Bueno Fernández, don Ricardo Manuel
Casals Parral, don Emilio
Corte Zapico, don Atanasio
Fernández Calviño, don Baldomero
Fernández Palacio, don Martín
Ferrer Gironés, don Francisco
Galván González, don Acenk-Alejandro
Giménez Navarro, don Fernando
González Gastañaga, don José
González González, don Antonio
González-Tarrijo Gallego, don José Mariano

Harguindey Banet, don Gerardo
Hernández Caire, don Antonio
Iglesias Corral, don Manuel
Iparraguirre García, don Enrique
Martí Massagué, don Carlos
Montero Rodríguez, don Celso
Navarro Estevan, don Joaquín
Oña Iribarne, don Manuel de
Oregui Goenaga, don Ignacio
Paz Andrade, don Valentín
Primo de Rivera y Urquijo, don Miguel
Villar Cerón, don José Luis

De acuerdo con lo prevenido en el artículo 39,2 del vigente Reglamento, la Mesa de dicha Comisión se integra de la siguiente forma:

Presidente: don Joaquín Navarro Estevan.

Vicepresidente Primero: don Fernando Giménez Navarro.

Vicepresidente Segundo: don Ignacio Oregui Goenaga.

Secretario Primero: don Baldomero Fernández Calviño.

Secretario Segundo: don José González Gastañaga.

Se ordena su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES.

Palacio del Senado, 10 de febrero de 1978.—El Presidente del Senado, **Antonio Fontán Pérez**; el Secretario Primero del Senado, **Víctor Carrascal Felgueroso**.

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.2 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES del ruego formulado por el Senador don José García García, sobre actualización del Catastro Fotográfico-parcelario de Rústica en la provincia de Pontevedra.

Palacio del Senado, 9 de febrero de 1978.—El Presidente del Senado, **Antonio Fontán Pérez**; el Secretario Primero del Senado, **Víctor Carrascal Felgueroso**.

A la Mesa del Senado: José García García, Senador por Pontevedra, al amparo de lo previsto en los artículos 129 y siguientes del Reglamento del Senado, tiene el honor de presentar a SS. SS., para su tramitación en forma, el siguiente ruego al Gobierno, para su contestación por escrito.

Antecedentes

En la provincia de Pontevedra, y a tenor de la Ley de la Jefatura del Estado de 20 de diciembre de 1952 y Orden del Ministerio de Hacienda de 19 de enero de 1953, se llevó a cabo la formación del Catastro Fotográfico-parcelario de Rústica en la casi totalidad de los Municipios, los cuales, a partir del año 1959, unos, y de 1964, la inmensa mayoría, vienen tributando a la Hacienda Pública por el citado régimen.

La función de conservación del Catastro de Rústica, que por virtud de la Ley de 6 de agosto de 1932 (algunos de cuyos preceptos siguen vigentes) competía a las

Juntas Periciales constituidas en cada uno de los Municipios, fue asumida, tras la nueva normativa, por la Delegación de Hacienda (Servicio de Catastro fotográfico-parcelario). Y así se dictaron, al respecto, la Orden de Presidencia del Gobierno de 24 de noviembre de 1953 ("BOE" de 15 de diciembre), las Circulares de la Dirección General de Impuestos número 35, de 30 de julio de 1958 ("B. O. de Hacienda" de 8-8-1958), y número 57, de 29 de abril de 1960 ("B. O. de Hacienda" de 6 de mayo), y últimamente la Orden del Ministerio de Hacienda de 26 de enero de 1966 ("BOE" del 29).

Al haberse centralizado en la provincia todos los servicios relacionados con la conservación y actualización del Catastro de Rústica (planimetría, fotografía, fichas y cuadernos de campo, informativos, etc), la tramitación de alteraciones resulta sumamente laboriosa y se ha demostrado la imposibilidad técnica, y administrativa por supuesto, del Departamento provincial para tener al día los documentos catastrales. Ello, y por lo que respecta a la provincia de Pontevedra (no entramos en la consideración de lo que suceda en otras), viene avalado por los siguientes hechos:

1.º Que los documentos cobratorios de la contribución rústica —y consiguientemente los de la cuota empresarial agraria, sobre todo a partir del período 1970-71—, al no recogerse en los mismos las alteraciones que sucesivamente se fueron acumulando (se habla de una cifra que rebasa las 500.000 pendientes de tramitación), no reflejan la realidad y fidelidad contributiva del sector en la provincia.

2.º La abstención, cada vez más acusada, por parte de los contribuyentes, en la presentación de las variaciones al Catastro de Rústica, ante la actitud de la Administración de no poder tramitar las respectivas alteraciones, en muchos casos reproducidas año tras año infructuosamente. Entendemos, y esta interpretación parece responder a la más estricta y objetiva realidad, que no es imputable el hecho a fallos humanos ni técnico-administrativos del Departamento implicado, sino

a defectos de estructura y mecánica del sistema.

Existe un gran desconcierto y manifiesto malestar entre los miles y miles de contribuyentes de rústica, porque no vislumbran la posibilidad mediata de liberarse de la imposición contributiva que viene recayendo sobre propiedades globales o parcelas aisladas que ya no poseen desde varios años atrás.

Ruego:

Por todo ello se solicita del Gobierno:

1.º Que con la mayor urgencia posible disponga los trabajos de actualización del Catastro fotográfico-parcelario de Rústica en la provincia de Pontevedra, posibilitando las distintas fórmulas que permitan una máxima agilización: contratación directa, convenios con Ayuntamientos y Diputaciones o con empresas particulares, etc.

2.º Que se reconsidere la viabilidad de reimplantar el antiguo sistema de que sean los Ayuntamientos quienes, en coordinación con los servicios técnicos del Catastro de la provincia, asuman la labor de tramitación de las correspondientes alteraciones, a cuyo fin habría de facilitárseles copia de la documentación catastral o habilitar el procedimiento idóneo que permita tener al día un documento de tanta trascendencia.

3.º Que en todo caso se adecuen las normas sobre conservación y actualización del Catastro fotográfico-parcelario de Rústica, a fin de que los Departamentos a quienes, en definitiva, se atribuya tal función, se conviertan, además, en oficinas informativas abiertas al contribuyente, al menos determinados días al mes, a donde se pueda concurrir, sin sujeción a trabas administrativas o burocráticas, para solicitar toda clase de datos y comprobaciones relativos a la documentación catastral.

Palacio del Senado, 3 de enero de 1978.—
José García García.

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129, 2, del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES del ruego formulado por el Senador don Félix Pérez y Pérez, del Grupo Parlamentario Unión de Centro Democrático, sobre expansión de la ganadería equina en zonas de montaña.

Palacio del Senado, 9 de febrero de 1978.
El Presidente del Senado, **Antonio Fontán Pérez.**—El Secretario primero del Senado, **Víctor Carrascal Felgueroso.**

Félix Pérez y Pérez, Senador en representación de Burgos, integrado en el Grupo Parlamentario Unión de Centro Democrático, a tenor de lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento provisional del Senado (BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES del 22 de octubre de 1977) expone el siguiente ruego al Gobierno:

La ganadería equina, que en otra época representó el motor principal de la industria agraria, ha cedido lógicamente paso a la mecanización batiéndose en retirada en todos los países a medida que tal proceso avanzaba; sin embargo, políticas de planificación al respecto han ido sustituyendo los censos pecuarios equinos dedicados a la tracción agrícola y al servicio de las fuerzas armadas por colectivos de montaña y complementarios de la ganadería agrogénica que han permitido mantener niveles importantes a esta singular ganadería.

La sociedad moderna ha descubierto que el consumo de carne de équido ofrece ventajas y altas estimaciones por su contenido proteico, garantía sanitaria, acción inmunizante respecto a la tuberculosis—cada día más demostrada—, menor contenido en grasas, etc.

En definitiva, este alimento adquiere cada día más valor y demanda como lo demuestra la importación del mismo por parte de la Comunidad Económica Europea y las posibilidades de exportación que la carne de équido ofrece actualmente al mercado español.

Francia importa grandes cantidades de carne de equino, contando con autorización para transportarla desde Africa a través de nuestro país.

Nuestro censo de equino está en franca regresión, aunque se atisban movimientos de incremento si bien dentro de unos censos que actualmente no nos permiten abrir la exportación; sin embargo, la capacidad de nuestros pastizales naturales de valles, laderas y zonas agrícolas marginales para sostener ganadería equina es muy notable.

En consecuencia, a nuestro entender, resulta oportuno el poner en marcha un Plan Nacional de repoblación de ganado equino no sólo para la producción de carne y cueros, sino para el deporte, etc., dada la tradición y calidad que todavía conservan las típicas líneas de ganado equino español.

La política respecto al desarrollo de esta especie animal está actualmente confiada al Ministerio de Defensa (Cría Caballar), circunstancia que si en otra época tuvo justificación hoy no nos parece fundada si se piensa que el caballo representa muy poco o prácticamente nada en la defensa del territorio nacional y al servicio, por tanto, de las fuerzas armadas y ni siquiera es importante en las de Orden Público.

Parece lógico desde un planteamiento económico que si la especie equina resulta en su conjunto una explotación de animales de renta, su gestión política debe estar encuadrada en el Ministerio de Agricultura (Dirección General de la Producción Agraria) y no en el Ministerio de la Defensa.

En consecuencia, el Senador que suscribe, en aplicación de lo dispuesto en el señalado Reglamento de la Cámara, ruega al Gobierno, a través de los Departamentos ministeriales correspondientes, lo siguiente:

1.º Que se estudie un Plan Nacional de expansión de la ganadería equina en zonas de montaña y como factor de transformación de producciones agrícolas.

2.º Que se fomente el équido de depor-

te y como animal de compañía del hombre.

3.º Que se traspasen las funciones de cría caballar del Departamento de la Defensa al de Agricultura para engranarse dentro de la producción animal.

4.º Asimismo ruega se dé respuesta a este ruego en forma y tiempo oportunos por escrito, según lo previsto en el artículo 129 citado.

Madrid, 2 de febrero de 1978.—**Félix Pérez y Pérez.**

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129, 2, del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES del ruego formulado por el Senador don Félix Pérez y Pérez, del Grupo Parlamentario Unión de Centro Democrático, sobre cambio de denominación del Ministerio de Agricultura.

Palacio del Senado, 9 de febrero de 1978. El Presidente del Senado, **Antonio Fontán Pérez.**—El Secretario primero del Senado, **Víctor Carrascal Felgueroso.**

Félix Pérez y Pérez, Senador en representación de Burgos, integrado en el Grupo Parlamentario Unión de Centro Democrático, a tenor de lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento provisional del Senado (BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES del 22 de octubre de 1977), expone el siguiente ruego al Gobierno:

Partiendo del hecho universalmente admitido que dentro de la política agraria clásicamente integrada por las acciones: agrícolas, forestales y ganaderas, no existe ni tiene por qué existir equilibrio respecto a la importancia de las mismas, y teniendo en cuenta que en la sociedad moderna en que vivimos y a la que nos proponemos servir el Ministerio de Agricultura asume la principal función de "producir alimentos para el hombre", resulta anacrónica y desfasada la actual denominación del "Ministerio de Agricultura", que

ostenta nuestro Departamento Ministerial al efecto.

De otra parte, dentro de este Ministerio existen organismos autónomos tales como el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA); Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA); Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), que resuelven por separado líneas de acción política sin que en ningún caso se haga la más mínima mención en las actuales estructuras ministeriales al propósito fundamental del Departamento que es la producción de alimentos.

Por esta razón y otras que expresamos en ruegos aparte, el Ministerio de Agricultura como mínimo debe cambiar de nombre aunque lo conveniente sería una reestructuración a fondo.

De poco serviría cambiar sólo la denominación si se mantiene la tendencia clásica de no enfatizar la producción de alimentos, que es base para el soporte de nuestra población humana cada día más abundante y más exigente en cuya incidencia se suma la demanda asimismo creciente de la población turística por lo que se refiere particularmente a la producción de alimentos de origen animal.

El actual Ministerio de Agricultura, por llamarse así, da la impresión de ocuparse fundamentalmente en producciones agrícolas y de hecho es así, sin tener en cuenta que no se trata sólo de producir alimentos para el ganado, dando lugar a excedentes innecesarios al no existir relación entre dichas producciones, censo pecuario y propósito de producir alimentos de alto valor biológico (carne, leche, huevos, etc.), para el hombre.

En consecuencia, el Senador que suscribe, en aplicación de lo dispuesto en el señalado Reglamento de la Cámara, ruega al Gobierno, a través de los Departamentos ministeriales correspondientes, lo siguiente:

1.º Que el Ministerio de Agricultura pase a llamarse "Ministerio de Agricultura y Alimentación".

2.º Que no sólo es cuestión de nombre, sino necesaria la reestructuración interna

para dar cabida a un propósito más claro respecto a producción de alimentos para el hombre.

3.º Que dado el singular consumo y demanda por consiguiente de productos de origen animal, se considera la denominación para nuestro Ministerio de "Ministerio de Agricultura y Ganadería" o también por hacer referencia a otra fuente importante de alimentos para el hombre "de Agricultura, Ganadería y Pesca".

4.º Asimismo, ruega se dé respuesta a este ruego en forma y tiempo oportunos por escrito, según lo previsto en el artículo 129 citado.

Madrid, 2 de febrero de 1978.—Félix Pérez y Pérez.

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129, 2, del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES del ruego formulado por el Senador don José García García, sobre accidentes de tráfico en la Carretera Nacional 525, entre los p. k. 610 y 639, que fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES, número 45.

Palacio del Senado, 9 de febrero de 1978. El Presidente del Senado, Antonio Fontán Pérez.—El Secretario primero del Senado, Víctor Carrascal Felgueroso.

Excelentísimo señor: En relación con el ruego formulado por el Senador don José García García, sobre accidentes de tráfico en la Carretera Nacional 525, entre los p. k. 610 y 639, cuya publicación se realizó en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES, número 45, tengo la honra de enviar a V. E. la contestación formulada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, cuyo contenido es el siguiente:

"El tramo de la carretera N-525, de Zamora a Santiago, comprendido entre Lalín y el río Ulla, fue objeto de obras de ensanche y mejora del firme, por el Plan de Accesos a Galicia, siendo recibidas pro-

visionalmente el 6 de agosto de 1975 y definitivamente el 10 de diciembre de 1976.

Las mejoras incluyeron algunas variantes de trazado en campo abierto, pero se conservaron las travesías de Bandeira, Silleda y Lalín por la dificultad de supresión con un costo razonable.

El trazado en la travesía de Silleda se refleja en el plano que se adjunta en la documentación anexa. La curva que puede definirse como situada en las proximidades del Ayuntamiento, es la que tiene su vértice en el perfil 1.089, con clotoide A-40 y radio 40,3 metros y la del Mesón es la del perfil 1.106 con clotoide A-50 y radio de 60 metros, habiéndose conservado en ambas la sección transversal anterior para no afectar las aceras y edificaciones marginales.

Los puntos concretos a los que hace mención el ruego se encuentran en plena travesía urbana.

Se acompaña, asimismo, un plano de la travesía de Silleda, en el que se detalla la señalización existente, tanto la colocada por el MOPU, como la colocada por el Ayuntamiento.

Por la Sección de Circulación y Seguridad de la Dirección General de Carreteras se ha realizado un estudio de accidentes de tráfico en la carretera N-525, en el tramo comprendido entre los p. k. 609,000 al 644,520. Este estudio ha tenido como base los partes de accidentes remitidos por

la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra a la Jefatura Provincial de Carreteras, y se ha extendido a los años 1976 y 1977 (hasta 30 de noviembre), por entender que los anteriores no resultan significativos por encontrarse en fase de construcción.

Los resultados muestran, efectivamente, el alto grado de peligrosidad del tramo, especialmente en los p. k. 624/625, cuyo índice es superior a 300, es decir, se puede estimar que ocupa un lugar entre el 55 o 60 en la relación de los tramos más peligrosos.

Con tres o más accidentes, en el período estudiado, figuran los tramos de un hectómetro siguientes:

Km.	Hm.	Accid. con víct.	Muertos	Heridos graves	Heridos leves	Accid. sin víct.	Accid. Total
609	5	2	—	—	5	2	4
610	3	2	—	3	3	1	3
611	9	3	—	2	5	—	3
618	1	2	—	2	—	2	4
624	6	3	—	4	4	—	3
624	7	8	2	15	6	—	8
624	9	1	—	—	1	2	3
624	0	3	—	2	4	—	3

Comparando la peligrosidad en 1976 del tramo de carretera definido por los p. k. 609,000 y 644,520, con el total de la carretera estudiada y la red primaria española obtenemos índices superiores, como se refleja en el cuadro siguiente:

ITINERARIOS	Accidentes		Muertos	Heridos	Accid. con víct. Km.	Núm. de muertos Km.	Núm. de heridos Km.
	sin víct.	con víc.					
N-525 (609,000 - 644,520)	24	51	14	100	1,39	0,38	2,73
N-525 (Orense - Santiago)	41	95	21	168	0,86	0,19	1,52
Totales Red primaria	8.019	17.875	2.203	30.144	1,30	0,16	2,20

Destaca en el tramo estudiado el hectómetro comprendido entre los p. k. 624,7 y 624,8 con cuatro accidentes en 1976 y cuatro en el período enero-noviembre de 1977, todos ellos con víctimas.

Todo ello ha llevado a considerar las con-

diciones de deslizamiento del tramo, estudiándose, una vez más, las características del árido (peridotita de la cantera de Campomarzo) que se utilizó en la construcción. Los ensayos dieron los siguientes resultados:

— Ensayo «los Angeles» —gravas y gravillas—	16 %
— Equivalente de arena	56 %
— Peso específico aparente	2,66
— Peso específico SSS	2,68
— Peso específico real	2,70
— Absorción	0,57
— Coeficiente de pulimento, 6.º h 0,46-0,47-0,46	
— Ensayo Marshall densidad	2,34
	% huecos 5,9
	fluencia 10,—
	estabilidad 8,17
	betún % 4,6
— Resistencia conservada, inmersión-compre-	
sión	84 %

Estos resultados se encuentran dentro de los límites de las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas, y no se consideran anómalos.

Asimismo, durante los días 16 al 21 del presente mes de enero un equipo desplazado de la Jefatura Regional de Valladolid ha realizado ensayos de deslizamientos por el sistema del péndulo. Dadas las duras características climáticas de los citados días, los resultados son especialmente significativos.

— Curva del Fojo. En tres zonas dirección	(53
Santiago	(54
Valor medio resultante	(53
— Lugar de chapa. En tres zonas y dirección	(58
Santiago	(57
	(58
— Recta de Mera. En tres zonas y dirección	(61
Santiago	(61
	(61
— Puente de la Piedra .En tres zonas y direc-	(52
ción Santiago	(56
	(54
— Frente del Mesón Castelo. En tres zonas y	(54
dirección Orense	(56
	(52
— Frente a Ayuntamiento. En tres zonas y di-	(48
rección Santiago	(50
	(49

De los resultados obtenidos no se puede sacar la consecuencia de que el firme sea

deslizante, pues son valores aceptables los que superan el de 40.

Analizando los partes de accidentes correspondientes a los dos hectómetros con mayor concentración de accidentes, 624,6 y 624,7, se observa que la causa que figura en todos ellos es exceso de velocidad en curva, que todos se han producido con pavimento mojado y que en nueve de los once accidentes el sentido del vehículo culpable era hacia Zamora.

Parece, pues, que puede establecerse, como explicación de los accidentes habidos, la superposición de varias causas como son exceso de velocidad, curva y deslizamiento.

Todo ello ha motivado que, por la Dirección General de Carreteras se hayan tomado ya, para el presente ejercicio de 1978 las siguientes medidas:

— Establecimiento de controles severos de la velocidad por las fuerzas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

— Efectuar un tratamiento antideslizante de la travesía de Silleda.

Instalación de bandas rugosas que llamen la atención de los usuarios y los inviten a disminuir la velocidad.

Finalmente, se ha ordenado a la Jefatura Provincial el estudio de la curva por si fuera posible mejorar sus características, tanteando incluso la posibilidad de separar ambos sentidos de circulación para evitar los choques frontales".

Lo que de orden del señor Ministro de Obras Públicas y Urbanismo envió a V. E. para su conocimiento e inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES.

Dios guarde a V. E.

Madrid, 1 de febrero de 1978.—El Secretario General de Relaciones con las Cortes, **Rafael Arias-Salgado y Montalvo**.

En la Secretaría General de la Cámara se encuentra a disposición de los señores Senadores, la documentación complementaria de la contestación que se publica.

Precio del ejemplar 12 ptas.
Suscripción Madrid y Provincias. 500 »

Suscripciones y venta de ejemplares:
SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.
Paseo de Onésimo Redondo, 38
Teléfono 247-23-00. Madrid (8)
Depósito legal: M. 12.580 - 1961